

La sanidad pública, una de nuestras mayores conquistas, está en peligro

Hay que actuar para salvarla y para salvaguardar, también, los derechos de los trabajadores de la sanidad pública

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto en muy poco tiempo las dramáticas consecuencias de las políticas desarrolladas por los sucesivos gobiernos, de los centrales en primer lugar, pero también de los autonómicos, desde hace décadas: recortes, privatizaciones y desmantelamiento de la sanidad, de los servicios sociales y de todos los servicios públicos se cobran hoy decenas de miles de vidas, y hunden las condiciones de vida de la población trabajadora. Mientras, un pequeño porcentaje, el más rico de la población, aumenta su fortuna (el patrimonio de los 23 españoles más ricos aumentó un 16 % entre marzo y junio de 2020).

Todas estas medidas han llevado a la sanidad pública al colapso, tanto en la atención primaria como en los hospitales. La necesidad de atender a los pacientes COVID ha sido la puntilla. El conjunto del sistema se muestra incapaz de atender a la población. Se ha dejado de operar casi todo, y se acumulan datos preocupantes, como un posible infradiagnóstico de hasta un 25 % de casos de oncología.

Según el propio Ministerio de Sanidad, en España faltaban 4.000 médicos especialistas en la sanidad pública en 2019. Y según un estudio del Consejo General de Enfermería del mismo año, serían necesarias 125.000 enfermeras más.

En plena pandemia, las multinacionales farmacéuticas y de seguros exigen al Gobierno que acelere la llamada «colaboración público-privada», con la intención de parasitar y destruir el sistema público de salud para hacer negocio por medio de nuevas privatizaciones. Exigencia basada en la recomendación del FMI que pide a España un aumento del gasto sanitario para potenciar la «asociación público-privada».

Nueve meses de pandemia han evidenciado la necesidad de disponer de un sistema de sanidad pública suficiente, de recuperar todo lo recortado en los últimos años (más de 25.000 millones): las medidas adoptadas hasta ahora por los gobiernos, bajo la presión de la pandemia y de la movilización de los trabajadores de la Sanidad y de la población, están muy lejos de abordar los problemas de fondo de desregulación, de falta de personal y de presupuesto en la sanidad pública, denunciados desde hace años; de falta de medios y recursos en todos los servicios públicos.

En una situación muy difícil, en la que la pandemia sirve para justificar todos los ataques a las libertades democráticas y a los derechos de los trabajadores, la población expresa su indignación como puede: profesionales y ciudadanos se manifiestan ante los centros de salud exigiendo más médicos, más enfermeras, más profesionales, más medios. Varios sindicatos reclaman la retirada del RDL 29/2020, que impone la movilidad funcional y geográfica al personal sanitario en nombre de la lucha contra la pandemia. El Gobierno central ha tenido meses para conseguir los fondos suficientes para contratar el personal necesario y formarlo, y no lo ha hecho; sin embargo, sí los ha encontrado para financiar a las grandes empresas. Y nos vienen de nuevo con el confinamiento y las medidas represivas, culpando a la población del ascenso de la COVID-19.

Poner parches ante la resistencia de los trabajadores de la sanidad no resuelve nada. La solución no es contratar en precario unos miles de profesionales, contratos que se hacen hoy y mañana pueden desaparecer de un plumazo. La solución no es la sobreexplotación del personal sanitario con jornadas agotadoras, pisoteando sus derechos. La solución no es el acompañamiento crítico de estas medidas.

Hay que superar la división y la dispersión de las movilizaciones. La solución exige la lucha por la movilización en unidad para defender las reivindicaciones, arrastrando a las direcciones de los sindicatos a ello. Las reivindicaciones más sentidas son:

- Ampliación de plantillas ya, creación inmediata de los puestos estructurales necesarios en hospitales y centros de salud. Retirada de la tasa de reposición. En lo inmediato, es necesario contratar y formar rastreadores.
- Retirada del RDL 29/2020 y de todas las medidas similares aprobadas por distintos gobiernos regionales.
- Defensa de las titulaciones y de las condiciones de trabajo: todos los técnicos y administrativos deben ser clasificados en el grupo profesional que les corresponde.
- Recuperación del 8 % de poder adquisitivo perdido. No es suficiente el incremento del 0,9 %.
- Presupuesto extraordinario para la sanidad y los servicios públicos que reponga los más de 25.000 millones de euros recortados al gasto sanitario desde 2011 (es menos de la mitad de lo regalado a los bancos). Urge terminar con el colapso de la atención primaria, y volver a las consultas presenciales. ¡Alto al desmantelamiento de la sanidad pública!

Los primeros firmantes de este Manifiesto os llamamos a suscribirlo, a recoger firmas, a hacer reuniones de firmantes para decidir cómo actuar para defender estas reivindicaciones, a formar comités.